

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE	Argemiro Ríos Ramírez
DEMANDADAS	Colpensiones
RADICADO UNICO NACIONAL	05001 31 05 014 2019 00733 01
TIPO DE PROCESO	Ordinario
DECISIÓN	Confirma
ACTA DE DECISIÓN	108 de 2021

Medellín, quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021).

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por la apoderada de Colpensiones contra decisión del 11 de mayo de 2021, que declara infundada la excepción previa de falta de agotamiento de la reclamación administrativa.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Las pretensiones de la demanda son la pensión de invalidez desde el 28 de marzo de 2016, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Colpensiones propuso como excepción previa la falta de agotamiento de la reclamación administrativa conforme al artículo 6° del CPT y de la S.S. Indicó que si bien se menciona el agotamiento de la reclamación administrativa con la presentación de la solicitud a Colpensiones, nunca se presentó a la sede ASALUD indicada para continuar con el trámite de la pensión, por lo que no se le ha dado una respuesta de fondo, pues los documentos válidos para la entidad son el dictamen médico laboral emitido por el área de medicina laboral de Colpensiones o la Junta Regional de Calificación en firme o el dictamen de la Junta Nacional de Calificación.

Dice no haber negado la posibilidad de realizar los estudios de pérdida de capacidad laboral, por el contrario, como consta en el expediente administrativo, se le indicó los lugares donde debía dirigirse para realizar esta valoración.

Agrega que en primera instancia debe haber un estudio por parte de la entidad, siendo obligación del afiliado presentar los documentos. Que no hay razón para no presentarse a los exámenes, por lo que no se le ha permitido a la entidad realizar el estudio y ejercer el derecho de defensa y contradicción. Alude a la presentación de la demanda antes de los 4 meses que tendría la entidad para emitir certificación y solicita la prosperidad de la excepción por el indebido agotamiento de la

reclamación administrativa, dando por terminado de manera anticipada el proceso para que en el afiliado presente los documentos idóneos y Colpensiones pueda analizarlos y tomar una decisión de fondo y ejercer su derecho de defensa y contradicción, cuyo resultado podría resultar en un reconocimiento pensional, siendo así fútil la presentación de una demanda.

En la audiencia del artículo 77 del CPT y de la S.S., el a quo declaró infundada la excepción propuesta por la entidad accionada por el cumplimiento del artículo 6° del CPT y de la S.S., indicando que conforme a los documentos de folio 17 y siguientes, se constata que el apoderado del demandante presentó derecho de petición a Colpensiones el 12 de octubre de 2019, solicitando el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común a partir del 28 de marzo de 2016 e informando sobre la fecha de nacimiento del demandante y el dictamen de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia que le acredita una PCL del 84,5%. Agrega que está el diligenciamiento del formato de solicitud de prestación económica ante Colpensiones según folio 21 acompañando los documentos que el formato requiere, lo cual es el mecanismo adecuado para provocar el pronunciamiento de la entidad, por lo que, transcurrido un mes sin pronunciamiento, el demandante podía acudir a la administración de justicia. Impuso costas a la entidad accionada en un (01) SMLMV.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con dicha decisión, la apoderada de Colpensiones presentó recurso de apelación insistiendo en la configuración de la excepción propuesta, porque si bien el demandante aporta pruebas de haber solicitado la pensión de invalidez, en el expediente

administrativo se tiene que Colpensiones lo requirió en varias ocasiones para que se presentara ante la entidad para que fuera calificado como primer encargado de hacer la calificación, conforme al artículo 41 Ley 100. Concluye que conforme al art 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la solicitud se dio por desistida por no llenar los requisitos, por lo que Colpensiones no tuvo la oportunidad de resolver la solicitud presentada, pues el actor en ningún momento se acercó a llenar los requisitos exigidos para hacer un estudio de fondo sobre la solicitud.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar si la parte demandante agotó la reclamación administrativa frente a la pensión de invalidez y los intereses moratorios acá pretendidos, y en consecuencia, definir si debe prosperar o no la excepción previa de falta de agotamiento de la reclamación administrativa propuesta por la accionada.

CONSIDERACIONES

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

En lo referente al agotamiento de la reclamación administrativa, el artículo 6° del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 4° de la Ley 712 de 2001¹, contiene

¹ “Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública solo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta.

una carga para la parte que pretende demandar a entidades de administración pública, de la cual no puede sustraerse a su libre albedrío, por obligarle su observancia como condición previa a la formulación de la demanda en los términos en ella dispuestos.

De manera que quien aspire a demandar a un ente público, es imperativo que en primer lugar le formule la correspondiente reclamación administrativa que consiste en el simple reclamo escrito del derecho que pretenda el interesado, presentándolo ante la entidad correspondiente, dado que ello constituye un presupuesto procesal necesario para que se configure en debida forma la relación jurídico procesal, pues su no agotamiento genera falta de competencia para avocar el conocimiento del proceso, implicando para el juez que no puede ejercer poder jurisdiccional.

Conforme a lo establecido en el artículo 1° del Decreto 4121 de 2011, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, por ende, la reclamación administrativa constituye un presupuesto de procedibilidad para demandar a dicha entidad pública ante la justicia ordinaria laboral.

La H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral ha analizado el alcance del requisito de procedibilidad, en el sentido que el mismo constituye un presupuesto procesal de competencia, necesario para que el funcionario judicial esté autorizado legalmente para el conocimiento del asunto, reconociendo la autonomía de ésta excepción en el derecho procesal del trabajo y de la seguridad social².

Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción.”

² Sentencia de radicación N° 12.221 del 13 de octubre de 1999, reiterada en providencia de radicación N° 30.056 del 24 de mayo de 2007 y SL13128-2014, Radicación No. 45819 del 24 de septiembre de 2014. En la de 2007 se indicó:

“(…) En cuanto a la naturaleza jurídico-procesal de la exigencia del agotamiento de la vía gubernativa en el procedimiento laboral, si bien para explicar la misma se han construido varias tesis, tales como la de asimilarla a un requisito de la demanda, o de considerarla un presupuesto de

En el presente caso se advierte del expediente virtual lo siguiente:

- Derecho de petición dirigido a Colpensiones por el apoderado del señor Argemiro Ríos Ramírez con fecha 2 de octubre de 2019,³ solicitando la pensión de invalidez de origen común y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
- Además de dicha petición, obra “FORMATO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS” de Colpensiones⁴, debidamente diligenciado. Así mismo se diligenció los formatos de “DECLARACIÓN DE NO PENSIÓN” y “FORMATO INFORMACIÓN EPS”.
- Con lo anterior se adjuntó copia de la cédula de ciudadanía del demandante y dictamen de la Facultad Nacional de Salud Pública,

la acción, o de calificarla como un factor de competencia, lo cierto es que la jurisprudencia de la Sala Laboral siempre que se ha ocupado del tema se ha inclinado por esta última, esto es, que la misma constituye un factor de competencia para el juez laboral, pues mientras este procedimiento preprocesal no se lleve a cabo el Juez del Trabajo no puede aprehender el conocimiento del conflicto planteado; además, esta calificación dada a la vía gubernativa encuentra sustento también en que el artículo 6° del C. de P.L. figura dentro de las normas de dicho estatuto procesal que regulan el fenómeno de la competencia en materia laboral.

Entonces, dado que la exigencia del artículo 6° del C. de P.L es un factor de competencia, y por ende un presupuesto procesal, la misma debe encontrarse satisfecha en el momento de la admisión de la demanda. Por tanto, cuando se presenta una demanda contra alguna de las entidades públicas o sociales señaladas en la norma precitada es deber ineludible del juez laboral constatar, antes de pronunciarse sobre la admisión de tal escrito introductorio, que se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario previsto en dicho precepto, obligación procesal que el dispensador de justicia debe cumplir con sumo cuidado y acuciosidad, ya que está de por medio nada menos que establecer si tiene competencia o no para conocer del pleito que se pone bajo su consideración, así como el cumplimiento de los imperativos que le imponen los artículos 37 del C.P.C., modificado por el D.E. 2282 de 1989, art. 1°, num. 13 y 38 ibídem, en relación con el deber de precaver los vicios de procedimiento, rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente y evitar providencias inhibitorias. Y si se percata que no aparece demostrado el cumplimiento de esa etapa prejudicial, es su obligación rechazar de plano la demanda, por falta de competencia, tal y como lo prevé el artículo 85 del C. de P.L., modificado por el D. E. 2282/89, art. 1°, num. 37, norma aplicable al procedimiento laboral en virtud del principio de integración analógica consagrado en el artículo 145 del C. de P.L., toda vez que en este ordenamiento procesal no hay disposición que regule lo atinente a las consecuencias de la falta del presupuesto procesal de la competencia al examinarse la viabilidad o no de la demanda”

³ Fl. 17 del expediente virtual

⁴ Fl.21

quien lo calificó con el 85,25% de PCL y fecha de estructuración 28 de marzo de 2016.

- La petición, junto con los formatos de Colpensiones y los demás documentos fueron remitidos a dicha entidad por correo certificado, y obra constancia de entrega del 7 de octubre de 2019⁵. Sin que al 18 de diciembre de 2019, fecha de presentación de la demanda, se haya dado respuesta a tal solicitud.

De lo anterior se advierte que la parte demandante cumplió con la exigencia del artículo 6° del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 4° de la Ley 712 de 2001, el cual consiste en el simple reclamo escrito sobre el derecho que pretenda.

La recurrente indica que hubo requerimiento en varias ocasiones para que el accionante se presentara ante la entidad determinada por el fondo público de pensiones, a efectos de practicarle la respectiva valoración de pérdida de capacidad laboral, y que al no cumplir con ello la solicitud pensional respectiva se dio por desistida acorde con las normas que regulan el procedimiento administrativo, lo cual en principio tendría vocación de éxito.

Ahora, si bien en el expediente administrativo obran requerimientos del 26 de mayo de 2015 y 9 de junio de 2016 indicándole al demandante que para continuar el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral deberá presentarse en la sede Asalud con copia del documento de identidad e historia clínica, y el 12 de agosto de 2019 se le indica que para continuar con dicho trámite deberá presentarse a

⁵ Fl. 30 y 32

cualquier punto de atención al ciudadano de Colpensiones. Y finalmente el 8 de octubre de 2019 se le requiere para que aporte documentos para poder continuar con el trámite de pensión de invalidez, no obra constancia de comunicación al accionante, por tanto, no se puede dar por sentado que el interesado los conoció, requisito necesario para que dicho acto administrativo genere los efectos pretendidos por la accionada.

Los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, aplicables por analogía al Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social (artículo 145), regulan lo relacionado con la necesidad y carga de la prueba, la cual no asumió la parte demandada, toda vez que no acreditó que el demandante conociera los mencionados requerimientos a fin de dirigiese a ASALUD como lo refiere en la proposición del medio exceptivo.

De otra parte, tampoco se allegó actuación y/o providencia administrativa alguna que declarase “desistida” la petición de agotamiento de reclamación administrativa.

Ante la falta de prueba que sirvan de sustento al medio exceptivo propuesto, *de falta de agotamiento de la reclamación administrativa conforme al artículo 6º del CPT y de la S.S.*, se impone que el mismo sea desestimado, y por tanto la confirmación de la providencia objeto de recurso de alzada.

Así las cosas, se **CONFIRMARÁ** íntegramente la decisión que se revisa en apelación.

Costas en esta instancia a cargo Colpensiones por resultar vencido con la formulación del recurso. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$454.263 en favor de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PROMERO: CONFIRMAR la decisión que se revisa en virtud del recurso de apelación, presentado por la apoderada de Colpensiones, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$454.263 en favor de la parte demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**. Se ordena incorporar este auto al expediente y regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 124 del Julio 16 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL
DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL
DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL
DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**0da474a583adf4451f05affc4e3b46c5c3c055ba69514652d85cb078aa5
3148d**

Documento generado en 15/07/2021 04:11:10 p. m.